

ejecución que utilizó fueron de mutuo propios, investidos de libre albedrío; por lo que es imperioso que su conducta sea castigada para que no se siga cometiendo y en su momento se logren erradicar tales actos del cuerpo de la policía estatal, en aras de la seguridad pública plena, pues de permitirse esos quebrantamientos a la legalidad o que este cuerpo de justicia policial omita pronunciarse respecto de esos hechos, estaríamos permitiendo que se siga atentando contra el sistema de seguridad pública en sus distintos ámbitos de funcionamiento territorial.

V. La antigüedad del servicio. El Policía Estatal **IGNACIO GALLEGOS CHONA**, ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública, el dieciséis de enero de dos mil catorce; es decir, ha fungido como integrante de esta Institución seis años aproximadamente, por lo cual es indudable que el hoy responsable conoce perfectamente la normatividad policial y en consecuencia las sanciones a que puede hacerse acreedor, así como las obligaciones que debe cumplir.

VI. La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones. Dentro del expediente que se actúa, no se advierten sanciones derivadas de investigaciones y/o procedimientos administrativos diversos, no obstante, de ello, los hechos que hoy se le atribuyen y que fueron debidamente acreditados en este Cuerpo Colegiado, indican su falta de certeza, legalidad, objetividad, profesionalismo y eficiencia, lo que implica la necesidad de sancionar para evitar este tipo de conductas.

VII. Por cuanto hace “el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones”, de autos se advierte que el elemento policial Ignacio Gallegos Chona, durante el desarrollo del incumplimiento de sus deberes y de la investigación incoada en su contra, estuvo cobrando su salario sin devengarlo, por el lapso de **setecientos sesenta y cinco días** de manera normal, hasta que le fue impuesta la medida cautelar ordenada en el acuerdo de fecha dos de junio de dos mil diecisiete; causando un perjuicio económico a la Secretaría de Seguridad Pública, derivado del incumplimiento de deberes, circunstancia por la cual, este Consejo no debe ser benévolo con las acciones de los policías que infringen la normatividad policial.

Bajo estas condiciones se estima que las conductas desplegadas por el hoy responsable, se encuentra previstas y sancionadas en las fracciones **I, III y VI del artículo 132 de la ley de la materia, y bajo este grado de reproche social**, este Consejo en términos del artículo 111 apartado B, fracción **IV** de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y que establece una sanción administrativa de **REMOCIÓN**; por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones, con anotación a su expediente personal.

Por lo antes expuesto, este Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, de aplicación supletoria, por disposición del artículo 2º. de la Ley de la materia determina resolver y:

RESUELVE

PRIMERO. Este Consejo determina que el Policía Estatal **IGNACIO GALLEGOS CHONA**, es responsable de los hechos que se le atribuyen por haber infringido las causales de remoción contenidas en las fracciones I, III y VI del artículo 132 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos de esta resolución.

SEGUNDO. Al Policía Estatal **IGNACIO GALLEGOS CHONA**, Se le impone la sanción administrativa de **REMOCIÓN DEL CARGO**, sin responsabilidad para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, teniendo por objeto la

separación definitiva del servicio policial, quedando inhabilitado para desempeñar el servicio policial en el Estado de Guerrero, en términos del artículo 134 de la ley de la materia; precisándose que la inhabilitación no es otra sanción, sino el resultado de la separación de cargo.

TERCERO. Gíresele copia certificada de la presente resolución, a la Licenciada Olivia Pineda Pineda, Directora General de Desarrollo Humano, para efectos de que la misma, sea agregada en el expediente personal del elemento sancionado.

CUARTO. En términos del artículo 135 de la Ley de la materia, gírense atentos oficios al Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, al Subsecretario de Prevención y Operación Policial, al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, al Director General del Sistema Estatal de Información Policial, al Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, a la Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano y al encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo de ésta Institución para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO. Se hace saber al **C. IGNACIO GALLEGOS CHONA**, que la presente resolución administrativa puede ser impugnada ante este cuerpo colegiado a través del recurso de reconsideración previstos en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos, disponiendo del término de quince días naturales a partir de su notificación en caso de inconformidad.

SEPTIMO. Notifíquese en términos de Ley a las partes, en el domicilio que han señalado para tal efecto.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. Así lo resolvieron por unanimidad los CC. LIC

